

LIMITACIONES DE LA EDUCACIÓN ESCOLARIZADA EN JÓVENES MIGRANTES

*José Ángel Vera Noriega
Claudia Karina Rodríguez Carvajal **

INTRODUCCIÓN

El campo agrícola en Sonora, además de enfrentarse a la sequía provocada por la escasez de agua de la zona desértica, ha tenido que competir con inversionistas extranjeros; esta competitividad de los frutos y hortalizas se ha basado en los últimos años en la mano de obra, por su calidad y costo. (Cepeda Neri, 1991).

El grupo social más afectado por la crisis económica que enfrenta actualmente el país son los indígenas que habitan la región sur, quienes han buscado la manera de subsistir presionados por la necesidad de alimento y la falta de empleo en su lugar de origen, integrándose al trabajo en campos agrícolas de la región Noroeste a través del proceso migratorio pasando a formar parte del grupo social denominado "Jornaleros Agrícolas Migrantes". Al observar y dar seguimiento a estas familias, se ha identificado que existen entre ellos, tres formas de migrar: 1) aquella donde la familia se mueve orientada por los ciclos agrícolas de hortalizas y frutas que varían en cada región por la estación y tardan varios ciclos agrícolas para regresar a su comunidad de origen (golondrina); 2) aquella donde la familia se instala una temporada y permanece durante las etapas del cuidado de la planta hasta la obtención del producto final (corte) y después regresa a su lugar de origen (pendulares); y 3) aquellas familias que deciden buscar oportunidades en Estados Unidos.

De acuerdo con datos del Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas (PRONJAG) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), existen en México un mínimo de 405 712 familias en permanente movimiento entre las zonas de origen y las zonas receptoras (Riojas, 2004). Según datos de la población total el 57.4% son hombres, mientras que el 42.5% son mujeres.

** Investigadores del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A. C. Depto. de Desarrollo Humano y Bienestar Social. Hermosillo, Sonora, avera@cascabel.ciad.mx*

Por grandes cortes de edad se observa que la población jornalera migrante es de corta edad, ya que el rango de hasta 14 años se encuentra 39.5% del total y en el de 15 a 29 años se localiza el 37.3%, a partir del rango de 30 a 44 años se registra un descenso, pues 15.1% de la población se encuentra en ese grupo generacional y en el de más de 45 apenas el 7.4% (SEDESOL, 2002).

Considerando la deplorable situación económica de las familias migrantes, los hijos pequeños son integrados al trabajo en campo dependiendo del cultivo ya que la edad entre 5 y 6 años (o más) pueden encargarse del desyerbado, recolección y selección de frutas y hortalizas mientras los niños entre 9 y 10 años o más son aceptados en el corte de la caña. La necesidad económica de las familias es aprovechada por los agricultores ante la necesidad de un número alto de mano de obra y la oportunidad de pagar salarios bajos que son aceptados por los indígenas. La inclusión de los niños a temprana edad en el mercado laboral como necesidad de apoyo económico familiar, tiene serias consecuencias, particularmente en el acceso a la educación. Actualmente se estima existen 900 mil niños laborando en el sector agrícola que han abandonado de manera temporal o definitiva la escuela; dando lugar, al incremento de analfabetismo e índices de reprobación. (SEP, 2002).

La demanda educativa del sector agrícola migrante joven para secundaria y preparatoria implica primeramente entender que su lengua materna debe ser respetada, no solo por la conservación del patrimonio cultural sino para mantener un proceso de identidad étnica que el joven requiere para fortalecer su independencia, seguridad y autoestima.



Así pues es necesario pensar en la enseñanza del español como segunda lengua que en lugar de competir estimule el desarrollo de la primera, la reconozca y la promueva. La demanda educativa exige además un modelo que permita respetar los tiempos de llegada y salida de un campo agrícola a otros y además coordinar de manera justa los procesos de preparación y recolección de frutos de tal manera que la negociación permita que los jóvenes se involucren en las tareas del campo de manera organizada y agendada y no de manera desordenada.

La demanda requiere además de un modelo educativo flexible administrativamente que conozca el sector y lo apoye evitando burocracias innecesarias o imposibles para los indígenas y permita el seguimiento y evaluación del joven a través de su recorrido. La demanda implica considerar la heterogeneidad de los jóvenes y sus necesidades inherentes como jóvenes hijos de campesinos indígenas a través de métodos que partan de premisas de enseñanza en donde la disciplina y el orden no sean condición necesaria para el aprender sino más bien la voluntad individual y la situación de caos. La actual oferta educativa es totalmente inadecuada primero porque esta fundada en un sujeto ideal promedio, de clase media de la zona urbana desde el currículo hasta sus materiales. Supone homogeneidad y disciplina para el aprendizaje, se desarrolla en espacios de tiempo definidos y largos, o sea está elaborada para grupos sedentarios pero además homo culturales y unigrado. Esto representa un problema para una población que asciende en el noroeste de México a 12, 736 alumnos (Riojas, 2004) y adquiere un matiz de exclusión y discriminación étnica que nos coloca como sociedad en una posición atrasada y degradante que asume la ignorancia y la injusticia como parámetro y permite que formas de explotación en el trabajo y exclusión educativa se planteen como puentes que separan la situación real de los jóvenes indígenas migrantes de las ganancias exportadoras de los dueños de campos agrícolas de alta tecnología.

Por otro lado, actualmente no existe ningún servicio propuesto para estimular la educación media y media superior en los jóvenes jornaleros pero su implementación requiere de un tipo de maestro integral, con una visión intercultural y con sistemas de aprendizaje colaborativos y significativos. Estudios sobre características del docente en escuelas de Sonora y Baja California Sur (Vera, Domínguez, Peña, Laborín, 1999; Vera, Domínguez, Peña y Laborín, 2001; Vera, Domínguez, Domínguez, Búrquez y Laborín 2002), muestran a) la capacitación que reciben los maestros no se relaciona con sus tareas de dentro del aula, sino que es vista como una herramienta para evidenciar administrativamente el progreso de los alumnos en términos de los objetivos del programa, como una medida inmediata de obtención de resultados para la toma de decisiones; b) la mayoría de los profesores que han asistido a capacitación no aplican lo aprendido a sus labores docentes; c) los tiempos y actividades que reportan para planeación muestran una falta de habilidades y competencias para comprender el proceso de enseñanza – aprendizaje asociada a la didáctica educativa.

Hacen falta políticas que estimulen el diseño de estrategias para la enseñanza media y media superior y permitan a esos jóvenes adquirir

conocimiento que les haga más humanos y competentes para comprender los procesos productivos y sociales y generar nuevas oportunidades de planeación de vida.

El documento sobre la pobreza en México 2004 (Banco Mundial, 2004) deja ver que en la educación, se lleva a cabo un esfuerzo para elevar la calidad de la educación media y superior a través de incentivos a maestros y becas a los alumnos para el acceso y permanencia en las escuelas, pero se advierte que si los programas no se consolidan, integran y evalúan los resultados de los procesos de apoyo seguirán siendo poco promisorios y hasta vergonzosos.

Los datos indican que los jóvenes, adultos mayores y mujeres de la zona rural e indígena presentan indicadores que reflejan el grado de exclusión social fundamentalmente en educación media superior y superior, con grandes rezagos generados por la deserción, fracaso y eficiencia terminal. Estos resultados impactan las posibilidades de mejorar los niveles de ingreso y capacitación y dinamizan el ciclo perseverante de migraciones y estimulan pensamientos de desamparo social. (Banco Mundial, 2004)

En salud, lo mismo que para educación, capacitación y nutrición los datos poblacionales promedio presentan una tendencia hacia la mejora de los indicadores en la última década que al desagregarse por grupos de ingresos, resulta en una desigualdad de las carencias para los pobres extremos y moderados. Esto es útil para puntualizar la falta de calidad, evaluación de programas, falta de integración intersectorial y una deficiente rendición de cuentas.

Las desigualdades regionales, género, zona rural – urbana, étnicas, para los indicadores de desarrollo humano establecen condiciones para que los ingresos, empleo, educación, salud y nutrición se encuentren por debajo de la media nacional para las comunidades indígenas y rurales del Sur de México, especialmente para el grupo de mujeres (Banco Mundial, 2004). El uso político con fines electorales de los programas y sus resultados promueve la simulación y la falta de continuidad de las acciones. Sin embargo, es importante mencionar que la ley de desarrollo social allanara la posibilidad futura de utilizar de manera flagrante y anticonstitucional los programas de desarrollo social como ventaja electoral del gobierno en turno. El documento presenta el panorama de los últimos cuatro años como el camino correcto, pero no acredita de manera estadística sobre las condiciones necesarias para

mantener la dirección de las acciones y la magnitud de los impactos a 5, 10 o 20 años de conservarse el Marco Teórico de la actual política social.

CONCLUSIÓN

Los datos presentados nos inclinan hacia una reflexión sobre las reformas que requieren las instituciones sociales y apuntan en el sentido de una política social como política de Estado. Además de la Ley de Desarrollo Social, se requiere de la concertación institucional hacia programas que fomenten las habilidades sociales de convivencia democrática bajo una redefinición del concepto de ciudadano, en la cual las diferencias sean la esencia de una diversidad de pensamiento, que sean capaces de promover modelos innovadores de pensamiento social constructivo sobre la base de nuestra historia como pueblo y nación

A su vez las inercias del pasado, están dañando la posibilidad histórica del cambio que se propone a través de los programas sociales, pues alimenta a grupos de interés: burocracias, líderes y clientelas. Se requiere dismantelar el clientelismo y los sistemas corporativos que operan buscando sus beneficios y desarrollar alternativas colectivas para la contratación de servicios y bienes de consumo dentro de los programas sociales. El nivel de inversión y los problemas asociados a la rendición de cuentas y vulnerabilidad de los pobres coloca a la juventud jornalera del campo en serias desventajas de desarrollo psicoeducativo,

Las inversiones en educación para adolescentes y jóvenes en la zona rural e indígena mejoran las capacidades futuras, haciendo que la vida adulta sea mas plena y menos problemática. Además de este efecto directo, una preparación afectivo-social adecuada en la juventud contribuye a la habilidad de los adultos para ganarse la vida, ser económicamente productivos y respetar los valores para la vida armónica en sociedad. Evaluar las inversiones en la adolescencia en relación con el desarrollo de comportamiento social como la habilidad de convivir con otros, la participación, la negociación y la mediación requiere más atención e investigación. Una última conexión de la inversión en capital humano desde la adolescencia es el concepto de ciudadanía y democracia pues es en la escuela secundaria cuando se establecen las bases del comportamiento moral y tiene lugar la preparación sistemática para vivir como ciudadanos activos y deliberantes.

REFERENCIAS

- Banco Mundial (2004), *La pobreza en México: Una evaluación de las condiciones, las tendencias y las estrategias del gobierno*. México: Banco mundial (Reporte # 28612-ME)
- Cepeda A. (1991), *Suplemento La Jornada Semanal*, número 105, del 16 de junio, p. 37.
- Riojas, T. (2004), Simposio de la Sociedad Sonorense de Historia "Migración y poblamiento en el Noroeste de México" Ponencia: *Mercado agrícola, educación y migración en los Estados del Noroeste de México*, 22-27 Nov., Hermosillo, Sonora.
- Secretaría de Educación Pública (2002), *Reglas de operación del Programa de educación primaria para niñas y niños migrantes*. Diario Oficial de la Federación. Tomo DLXXXIII, México, D.F.
- SEDESOL (2002), *El empleo de los trabajadores migrantes en labores agrícolas en México*. Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. México.
- Vera, N. J.; Domínguez, I. S; Peña, R. M.O. y Laborín, A. J. (1999), *Evaluación del impacto del programa integral para abatir el rezago educativo (PIARE) sobre competencias básicas*. Reporte técnico externo. DDR/DHBS-005-99 CONAFE – PIARE.
- Vera, N. J.; Domínguez, I. S; Peña, R. M.O. y Laborín, A. J. (2001), *Evaluación de las características y habilidades de profesores y su relación con las competencias básicas de los niños*. Reporte ejecutivo. CIADAC. Hermosillo, Sonora.
- Vera, N. J.; Domínguez G.L.; Peña, R. M.O., Búrquez, K. y Laborín, A. J. (2002), *Descripción de las prácticas de planeación y enseñanza de docentes en la zona rural de Baja California Norte*. *La Psicología Social en México*, Vol. IX, México: AMEPSO.